

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio No. _____

Santiago de Cali, treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Reparación directa
REFERENCIA:	76001-33-33-002-2013-00371-01
DEMANDANTE:	Nilson Danilo Chacón Flórez y otros. maurocas77@yahoo.com
DEMANDADO:	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC demandas.roccidente@inpec.gov.co
LLAMADO EN GARANTÍA:	La Previsora S.A. Compañía de Seguros notificacionesjudiciales@previsora.gov.co
TEMA:	Apelación de auto / Ausencia de sustentación del recurso / Principio de congruencia externa / Prueba documental / Deber de solicitar la prueba a la entidad que la posee antes de requerirla al juez / Inciso 2º artículo 173 del CGP.
DECISIÓN:	Confirma auto que niega decreto de pruebas

AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN

I. MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO

Corresponde al Tribunal decidir el recurso de apelación formulado por los apoderados de la parte demandante, demandada y llamada en garantía, contra el auto interlocutorio No. 921 del 20 de mayo de 2015 proferido en el curso de la audiencia inicial y mediante el cual el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali negó el decreto de algunas pruebas solicitadas oportunamente por los mencionados recurrentes.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

2.1. El señor Nilson Danilo Chacón Flórez y su núcleo familiar, ejercitando el medio de control de reparación directa promovieron demanda contra el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), buscando que le declare administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios que padeció a consecuencia de las lesiones sufridas el 7 de abril de 2012 con arma corto punzante, mientras se encontraba recluso en un establecimiento carcelario. En razón de la anterior declaración, pidió el actor se condene al ente demandado, que le pague la suma de \$90.000.000 por concepto de lucro cesante y 200 SMLMV más por daño a la salud. De igual forma solicitó el pago de la indemnización por perjuicio moral para cada uno de los demandantes¹.

¹ Folios 92 a 95 del expediente.



2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali, profirió auto interlocutorio No. 545 de noviembre 7 de 2013², mediante el cual admitió la demanda, por lo que surtió el trámite pertinente a la misma convocando a la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para el día 20 de mayo del año 2015.

III. PROVIDENCIA APELADA

Una vez instalada la audiencia inicial, encontrándose el proceso en etapa de decreto de pruebas, el *a quo* profirió el auto interlocutorio No. 921 de mayo 20 de 2015³, mediante el cual decidió sobre el decreto de las pruebas solicitadas oportunamente por las partes.

3.1. Así, en lo que atañe a la decisión apelada, en primer lugar, el juez de primera instancia decidió negar la prueba documental solicitada por la parte demandante, dirigida a obtener una copia íntegra de la investigación penal adelantada por la Fiscalía 92 Local de Cali en contra del señor John Jairo González Bonilla y bajo la radicación No. 2012-00015 por el delito de lesiones personales, en donde funge como víctima el aquí demandante, señor Nilson Danilo Chacón Flórez. Lo anterior, por cuanto consideró que la referida prueba carecía de pertinencia, conducencia y utilidad, pues lo que se pretende demostrar en esta causa es la responsabilidad del INPEC frente a los hechos donde resultó lesionado el señor Chacón Flórez y no la responsabilidad penal de la persona que lo pudo haber lesionado; aunado a que, al tratarse de una responsabilidad de carácter objetiva, en nada interesa saber si fue o no un interno quien lesionó al actor.

3.2. Por otra parte, a través de esa misma providencia, el *a quo* negó el decreto de la prueba pericial solicitada por la parte demandante tendiente a remitir al señor Nilson Danilo Chacón Flórez con destino al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a fin de que fuera valorado para que se determinara el tiempo de incapacidad y las secuelas físicas que el incidente le causó.

La mencionada prueba fue negada por cuanto, en criterio del *a quo*, la misma era superflua, en la medida que, lo que se pretendía establecer con ella ya se encontraba acreditado en el proceso, esto es, las lesiones causadas al demandante, las cuales estaban plenamente demostradas con el historial clínico allegado, aunado a que, se decretó la práctica de un dictamen pericial por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca con el que posteriormente se establecería una posible pérdida de capacidad laboral del actor y en ese orden de ideas, consideró que era innecesaria la prueba solicitada al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; comoquiera que, ella redundaba en un hecho ya demostrado, es decir, que el demandante resultó lesionado.

² Folio 116 a 117 del expediente.

³ folio 174 a 176A del expediente.



3.3. Asimismo, el juez de primera instancia decidió negar el decreto de la prueba documental pedida por el INPEC al considerar que todo el material documental solicitado se encontraba en su poder, pues para la consecución de la misma se pidió que se oficiara al INPEC de la ciudad de Cali y en ese entendido, consideró que la obligación de la parte demandada es aportar las pruebas que tiene en su poder al momento de contestar la demanda y no solicitar que el juez oficie a la misma entidad con el propósito de que aporte las pruebas que ella misma posee.

3.4. Finalmente, en la misma providencia se negó el interrogatorio de parte del señor Nilson Danilo Chacón Flórez solicitado por la llamada en garantía La Previsora S. A., al considerar que la prueba era impertinente, pues estando frente a un régimen de responsabilidad objetivo, nada que se le pudiese preguntar al demandante sería relevante para el proceso, ya que, sus lesiones están acreditadas y el hecho de saber si al momento de sus lesiones él participó o no activamente de una riña era indiferente precisamente por el régimen de responsabilidad a emplear, ni para un eventual eximente de responsabilidad.

IV. EL RECURSO Y LA OPOSICIÓN.

4.1. Parte demandante.

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación⁴ manifestando que, frente a la prueba documental solicitada a la Fiscalía 92 Local de Cali para que allegue la respectiva copia de la investigación penal surtida; así como la experticia solicitada al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, debe surtirse el trámite de alzada a efectos de que sea esta Corporación quien establezca la pertinencia y conducencia de las mencionadas pruebas que fueron negadas en primera instancia.

4.2. Parte demandada

Presentó recurso de apelación⁵ argumentando que si bien las pruebas documentales solicitadas en la demanda se encuentran en cabeza del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad de Cali, siendo esta una dependencia adscrita al INPEC, en todo caso, para el momento en que fue contestada la demanda los mencionados documentos se encontraban en poder del director de dicho establecimiento, a quien se le solicitaron oportunamente los mismos; no obstante, no fueron entregadas y por ello finalmente se solicitaron al juez de primera instancia debido a la pertinencia de las mismas; razón por la cual, pide que se revoque la decisión de primera instancia en lo que respecta a la negativa de la mencionada prueba documental.

⁴ Folio 174 a 176A del expediente.

⁵ Folio 174 a 176A del expediente.



4.3. La Previsora S. A.

Inconforme con la decisión de negar el decreto del interrogatorio de parte solicitado, interpuso recurso de apelación⁶ con el propósito de que esta Corporación determine la pertinencia y conducencia de dicha prueba.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia, procedencia y oportunidad del recurso

De conformidad con lo establecido en el artículo 153⁷ del CPACA, esta Corporación es competente para conocer en Sala Unitaria⁸, del recurso de alzada interpuesto dentro del proceso de la referencia y en virtud de lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 243 *ibidem* –antes de ser reformado por la Ley 2080 de 2021– la providencia apelada es susceptible de dicho recurso.

De igual forma, puesto que, la decisión recurrida fue proferida en el trámite de la audiencia inicial y las alzadas fueron interpuestas y sustentadas en esa misma diligencia, considera el despacho que dichos recursos fueron interpuestos oportunamente según lo dispone el numeral 1° del artículo 244 del CPACA⁹.

Aclarado lo anterior, se procede a resolver de fondo el recurso interpuesto.

5.2. Problema jurídico

La controversia jurídica planteada se resuelve respondiendo el siguiente interrogante:

– ¿Carecen de pertinencia y utilidad las pruebas solicitadas oportunamente por la parte demandante, demandada y llamada en garantía, que fueron negadas en primera instancia?

5.3. Tesis de la Sala Unitaria

Al momento de tratar de resolver el problema jurídico planteado, encuentra el Despacho que los apoderados de las partes demandante y llamada en garantía no cumplieron con la carga argumentativa necesaria para dar trámite a sus recursos de apelación, pues no esgrimieron aspectos concretos de inconformidad en contra de la decisión de primera instancia y por ello la misma debe ser confinada.

⁶ folio 174 a 176A del expediente.

⁷ **Artículo 153.** Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

⁸ Artículo 125 del CPACA (Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021).

⁹ Antes de ser reformado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021.



De igual forma, frente al recurso de apelación formulado por la entidad demandada, el mismo tampoco tiene vocación de prosperidad; comoquiera que, la prueba documental cuyo decreto se solicita y que fue negada en primera instancia, nunca fue solicitada mediante el ejercicio del derecho de petición a la entidad que la posee, siendo ello condición necesaria para su decreto en los términos del inciso 2º del artículo 173 del Código General del Proceso (CGP).

VI. CASO CONCRETO

El Despacho entra a decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la parte demandante, demandada y llamada en garantía contra el auto interlocutorio No. 921 del 20 de mayo de 2015, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali, que negó el decreto y práctica de algunas pruebas solicitadas oportunamente por los referidos recurrentes.

Así, revisados los argumentos de las respectivas azadas, el despacho encuentra que los recursos presentados por los apoderados de las partes demandante y la llamada en garantía, carecen de sustentación alguna, pues se limitaron a indicar que el asunto debía someterse a conocimiento de esta Corporación con el propósito de que se determinara la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas que fueron negadas; sin embargo, no se explicó, en que forma, las pruebas negadas cumplen con esas características, a pesar de que el *a quo* explicó las razones por las que, en su criterio, dichas solicitudes probatorias no cumplen con los requisitos para ser decretadas.

Teniendo en cuenta lo expuesto y como en efecto lo ha planteado el Consejo de Estado¹⁰ en otras ocasiones, con la actuación que acaba de describirse, los mencionados recurrentes *–parte demandante y llamada en garantía–* omitieron plantear censuras respecto de la decisión efectivamente adoptada por el *a quo*, siendo que en el trámite de la segunda instancia el juez solo puede decidir sobre los reparos concretos formulados por el apelante frente a la decisión adoptada en la primera instancia, ya que así lo impone el principio de congruencia externa que emana del artículo 320 del CGP y por ello, al no existir reparo concreto frente a la decisión *–por ausencia de sustentación de los recursos–*, la misma será confirmada en lo que respecta a las pruebas negadas y que fueron solicitadas por las partes demandante y llamada en garantía.

Por otro lado, en lo que atañe a la prueba documental que le fue negada a la parte demandada INPEC, dirá el despacho que no obra en el plenario elemento alguno que demuestre siquiera sumariamente que, previo a solicitar este material documental al juez de primera instancia, el apoderado de la entidad demandada requirió mediante el ejercicio del derecho de petición dicha documentación al INPEC de la ciudad de Cali o a su director, como lo expuso en el recurso, y por estas razones, en virtud de lo dispuesto

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2021, CP. Milton Chaves García. Radicación número: 66001-23-33-000-2018-00114-01 (25157).



en el inciso 2º del artículo 173 del CGP, la mencionada prueba debe ser denegada y en ese orden de ideas, la providencia apelada en este aspecto también será confirmada, pero por las razones acá expuestas.

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Despacho del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 921 del 20 de mayo de 2015, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, según lo expuesto.

SEGUNDO. Ejecutoriada la presente providencia envíese el proceso al juzgado de origen para que continúe el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA
Magistrado ponente
(Firma electrónica SAMAI)